

2024



Evaluación de Impacto

Acción Integral Contra Minas en cinco municipios del Putumayo
Puerto Asís, Puerto Caicedo, Puerto Guzmán,
Puerto Leguizamó y San Miguel



Evaluación de Impacto

Acción Integral contra Minas en cinco municipios del Putumayo

Puerto Asís, Puerto Caicedo, Puerto Guzmán, Puerto Leguízamo y San Miguel.

Diciembre 2021 – Noviembre 2023

EQUIPO

Juliana Valencia Ruiz, Gerente de Evaluación de Impacto de la CCCM, responsable del diseño metodológico, recolección de información y de la elaboración de los contenidos en el presente documento.

Magda Portilla Ferrer
Gerente de Proyectos y Monitoreo.

William Espinosa Montealegre
Coordinador Oficina Regional Putumayo.

Aida Lupe Acosta
Coordinadora Adjunta de Enlace Comunitario.

Se contó con el respaldo y aprobación de la investigación por parte del director Camilo Serna, así como el apoyo logístico y operativo a los procesos de recolección de información por parte de la oficina regional de Putumayo.

Los contenidos de este documento pueden ser reproducidos en cualquier medio, citando la fuente.

Agosto 2024

Contenido

Introducción	4
Metodología	6
Resumen ejecutivo	8
Contexto del proyecto	10
Análisis de resultados	16
Aportes de la AICMA a mejorar las condiciones de vida y seguridad a través de la liberación de tierras	16
Movilidad en el territorio	17
Disminución del riesgo, miedo e incertidumbre después de la liberación de tierras	18
Reactivación de economías individuales o colectivas.....	19
Oportunidades de empleo	21
Implementación de programas o políticas públicas.....	21
Contribución a las comunidades para que mitiguen los riesgos e impactos relacionados con la presencia de artefactos explosivos en el territorio	24
Apropiación de aprendizajes en ERM.....	25
Estrategias de gestión en el territorio.....	26
Consolidación de la estrategia de transversalización de género con enfoque diferencial étnico potencialmente replicable	27
Percepción sobre el grado de participación de la organización en las acciones.....	27
La comunidad y el enfoque de género	28
La AICMA mejora las capacidades institucionales de los municipios en acción y respuesta frente a la contaminación por artefactos explosivos.....	29
Plan de Acción Integral contra Minas: Puerto Leguizamo	29
Estrategia de análisis y respuesta territorial.....	31
Análisis de eficiencia	34
Valoración de los beneficios percibidos por la comunidad	36
Lecciones aprendidas.....	38
Aprendizajes y oportunidades de mejora del proyecto.....	40
Aprendizajes	40
Oportunidades de mejora	41
Conclusiones.....	43
Referencias	44
Entrevistas.....	44

Introducción

En el siguiente informe se resumen los principales hallazgos de la evaluación de impacto del proyecto Acción Integral contra Minas (AICMA) en cinco municipios de Putumayo (Puerto Asís, Puerto Caicedo, Puerto Guzmán, Puerto Leguizamó y San Miguel) cofinanciado por COSUDE, Ministerio de Asuntos Exteriores Noruega, Departamento de Estado de los Estados Unidos y Ministerio de Asuntos Exteriores Alemania.



Con la evaluación de impacto, la CCCM logró, por una parte, documentar los cambios generados por el proyecto en las comunidades beneficiarias frente a la reducción de riesgos por presencia de artefactos explosivos, uso de la tierra para fines productivos, acceso a servicios básicos, mejoras en el bienestar y calidad de vida, y transversalización del enfoque de género.

Por otra parte, se logró determinar en qué medida se alcanzó la pertinencia, impacto, eficiencia, eficacia y sostenibilidad de los efectos del proyecto y los procesos misionales de la CCCM en los municipios intervenidos desde el 2021 al 2023.

Estos hallazgos constituyen un primer análisis del vínculo causal entre la Acción Integral contra Minas y la mejora en el bienestar de la población en los cinco municipios de Putumayo.

Los cambios en las condiciones de vida y capacidades de las personas participantes de las actividades del proyecto (directas e indirectas) permitieron establecer la relación con las prioridades y necesidades de los donantes y a su vez, la organización espera fortalecer los procesos de diseño y ejecución en las intervenciones posteriores.

Para establecer si hay una relación de causalidad entre los impactos y los efectos generados como resultado del proyecto, se recolectó información a partir de la percepción de la comunidad que participó, y aunque esto representó un desafío por su misma subjetividad, se consideró en la creación de categorías de análisis cualitativas, una oportunidad para identificar la medida en que contribuye las actividades de la AICMA al objetivo del proyecto.

En este sentido, se definieron 5 relaciones de causalidad¹ en las herramientas, partiendo de los beneficios percibidos por la comunidad del AICMA, así como 5 criterios de evaluación.

Tabla 1. Categorías de análisis de la relación causal de impactos y efectos del proyecto

Relación de causalidad (Efectos del proyecto/impactos)		Beneficios percibidos por la comunidad (hipótesis)
Aportes de la AICMA a mejorar las condiciones de vida y seguridad a través del despeje de los predios/terrenos	Seguridad	Movilidad en el territorio
		Disminución del riesgo en las áreas intervenidas
		Disminución del miedo e incertidumbre en el municipio, zona urbana, rural
	Desarrollo local	Reactivación de economías individuales o colectivas
		Generar oportunidades de trabajo
		Implementación de programas o políticas públicas (PDET ² , PNIS ³ , Restitución de Tierras, etc.)
Contribución a las comunidades para que mitiguen los riesgos e impactos relacionados con la presencia de artefactos explosivos en el territorio.	Comportamientos seguros	Apropiación de los aprendizajes adquiridos en Educación en Riesgo de Minas (ERM)
		Cobertura de las actividades y de quienes se benefician directamente
		Fortalecimiento de la gestión en los territorios
La CCCM consolida su estrategia de transversalización de género con enfoque diferencial étnico potencialmente replicable	Satisfacción	Percepción sobre el grado de participación de la organización en las acciones
		Satisfacción de la comunidad con el desarrollo de las acciones
La AICMA mejora las capacidades institucionales de los municipios en acción y respuesta frente a la contaminación por artefactos explosivos	Aprendizaje organizacional	Aprendizaje integral adquirido por la organización
		Adecuación de las actividades y herramientas al contexto y comunidad

Tabla 2. Criterios de evaluación

Criterios	Descripción
Eficacia	Capacidad en la cual se logran los resultados técnicos y financieros de un proyecto.
Eficiencia	Análisis de los resultados con relación a la utilización óptima y oportuna de los recursos del proyecto.

¹ Teniendo en cuenta que las categorías pueden ampliarse por tratarse de un ejercicio de percepción, la metodología es flexible en la medida que pueden aumentar o disminuir las categorías.

² PDET: Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial

³ PNIS: Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos

Sostenibilidad	Capacidad para mantener los resultados del proyecto por un largo periodo de tiempo.
Pertinencia/Coherencia	El objetivo del proyecto es consistente con las prioridades de desarrollo de la población y la misión y política de la organización, este permite determinar la validez de los resultados del proyecto como contribución a los cambios que se definieron en los objetivos de los programas de desarrollo.
Impacto	Resultados: condición para el cambio esperado.

Metodología

De acuerdo con la metodología propuesta, se cumplieron cinco acciones para la recolección, sistematización, análisis y evaluación:

1. Revisión documental del proyecto (ficha técnica, marco lógico, informe financiero, resultados de auditorías, informes de monitoreo, entre otros).
2. Construcción preliminar de categorías de impactos y beneficios, además de las herramientas de recolección de información.
3. Selección de la muestra y aplicación de herramientas de percepción. Entrevistas semiestructuradas a beneficiarios directos, equipo regional y actores institucionales.
4. Sistematización y análisis de información cualitativa.
5. Generación de informe de evaluación.

Las preguntas orientadoras de los grupos focales y entrevistas semiestructuradas se basan en los cuatro efectos del proyecto y las preguntas orientadoras expresadas en la tabla 3.

Grupos focales

Se realizaron dos grupos focales con la comunidad para evaluar la calidad, beneficios y oportunidades ofrecidos por el proyecto y la eficacia de este para responder a las necesidades, intereses y prioridades de la población donde se llevaron a cabo las actividades por parte de la CCCM.

Se realizaron dos espacios con niños, niñas y adolescentes en las escuelas. Uno en la vereda El Progreso y otro en el Cabildo Sitará donde se compartieron los aprendizajes y reforzaron los comportamientos seguros.

Se realizó un grupo focal con los Puntos Focales de Género (PFG) de la oficina de Putumayo para identificar la pertinencia, el impacto y la sostenibilidad de la estrategia de transversalización del enfoque de género. Además, de recopilar lecciones aprendidas y buenas prácticas.

Entrevistas semiestructuradas

Se dialogó con cuatro beneficiarios de liberación de tierras de cara a identificar los impactos del componente y las estrategias de sostenibilidad.

Se entrevistó a personal del equipo regional sobre la eficiencia y eficacia del proyecto en términos de recursos humanos, financieros y materiales.

Se entrevistó al gabinete y secretaria de gobierno de Puerto Asís sobre las acciones de la CCCM y los procesos de articulación con la institucionalidad para promover efectos a largo plazo.

Muestra

El muestreo utilizado fue no probabilístico intencional, lo que permitió seleccionar casos representativos de la población objetivo, limitando la muestra únicamente a estos. Esta metodología fue especialmente relevante en territorios con desafíos significativos, como la persistencia del conflicto armado y las grandes distancias para acceder a veredas, corregimientos y zonas rurales. En consecuencia, la muestra obtenida fue variable y reducida.

Adicionalmente, la limitada disponibilidad de recursos dificultó incluir poblaciones de los municipios más remotos. Cabe destacar que esta evaluación de impacto surgió como parte de un plan de mejoramiento para la organización, por lo que se ajustó a las condiciones que permitía el presupuesto disponible.

La recolección de información se llevó a cabo entre el 22 y el 27 de julio de 2024, involucrando a la comunidad participante en las actividades del proyecto. Esto incluyó al equipo regional (habitantes locales), autoridades locales y étnicas, así como a la población de las veredas El Progreso, El Jardín, Teteyé y el Cabildo Sitará. Durante este periodo, se logró alcanzar a 46 beneficiarios directos, de los cuales el 41 % se identificaron como hombres y el 59 % como mujeres.

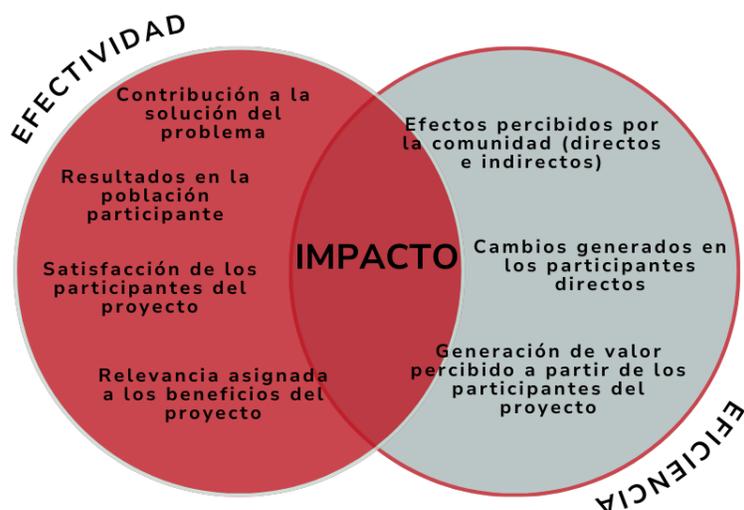
Para ampliar la muestra, se realizaron recorridos en el municipio de Puerto Asís, visitando las veredas mencionadas y entrevistando a actores clave en la cabecera municipal, como la secretaria de gobierno y su equipo. Asimismo, en el municipio de Puerto Caicedo se entrevistó al alcalde local.

Esta evaluación de impacto representa el primer ejercicio interno realizado por la CCCM en el departamento del Putumayo, ya que anteriormente las evaluaciones en otros municipios habían sido contratadas a terceros.

Resumen ejecutivo

La finalización del proyecto Acción Integral contra Minas en los municipios de Puerto Asís (Zona 1 y Zona 2), Puerto Caicedo, Puerto Guzmán, San Miguel y Puerto Leguizamo representa una oportunidad para comprender las posibilidades y retos a los que se enfrenta la Acción Integral contra Minas en Colombia, y en específico en el departamento del Putumayo, donde confluyen factores geográficos, sociales y de conflicto armado que requieren de ajuste y diversificación de capacidades organizacionales para cumplir con los objetivos proyectados y por consiguiente las de sus donantes.

Para la evaluación, el centro fue la percepción de la comunidad, entendida en cuatro grupos: beneficiarios directos de actividades, comunidad que habita el municipio, autoridades locales y el equipo regional de la CCCM. Las variables de medición se agruparon bajo los criterios de efectividad y eficiencia del proyecto:



En términos de pertinencia, el proyecto ha contribuido a que la población se sienta más segura y pueda hacer un uso adecuado del territorio que habita. Asimismo, la adopción de comportamientos seguros es percibida como una medida efectiva para mitigar el riesgo de nuevos accidentes. La comunidad expresó su satisfacción con el proyecto, destacando el buen relacionamiento de la CCCM con los habitantes locales y el respeto hacia su cultura.

Respecto al componente de liberación de tierras, este se identifica como una acción clave que permite utilizar las áreas despejadas para tres fines principales: la agricultura, el tránsito y la conectividad rural, así como la recuperación del territorio ancestral, preservando la cultura de las comunidades étnicas.

En cuanto a la Educación en Riesgo de Minas (ERM), la comunidad valora su impacto en la prevención de accidentes mediante el aprendizaje sobre la identificación y manejo del riesgo asociado a artefactos explosivos. Por su parte, el componente de Asistencia Integral a

Víctimas (AIV) es reconocido por su acompañamiento a sobrevivientes y familiares de víctimas, especialmente en la activación de rutas de atención integral a nivel municipal.

Aunque la comunidad no percibe acciones específicas relacionadas con el enfoque de género, reconoce un cambio positivo en la asignación de roles dentro de los equipos de trabajo, donde tanto hombres como mujeres han asumido funciones distintas a las tradicionales. Además, al estar conformados principalmente por miembros de la comunidad, los equipos transmiten los conocimientos adquiridos durante las capacitaciones de manera cotidiana, aplicando el enfoque de acción sin daño. Este cambio es especialmente notable en las comunidades indígenas.

Finalmente, el impacto del proyecto en la comunidad se relaciona con la relevancia de los beneficios generados y el valor asignado a estos. La población manifestó que, gracias a las acciones implementadas, se han reactivado oportunidades económicas que antes estaban limitadas por la presencia de minas antipersonal. Por ejemplo, los propietarios de tierras han podido retomar proyectos productivos como el cultivo de cacao y piña, y han accedido a programas gubernamentales enfocados en la promoción de cultivos legales.

Para las comunidades étnicas, el impacto del proyecto se vincula con la habilitación de procesos y programas gubernamentales, tales como la titulación de tierras, la restitución colectiva y el desarrollo de proyectos productivos.

Si bien la medición involucró los indicadores de efectos, ésta amplió información sobre las capacidades y condiciones de los beneficiarios, comunidad y autoridades locales frente a los resultados a largo plazo del proyecto. Para el caso del Putumayo, fue importante vincular al análisis las condiciones de seguridad y acceso en municipios donde el avance de los equipos de despeje y Estudio No Técnico ha sido menor por factores externos como la presencia y constantes combates entre grupos armados no estatales (GANE) que ejercen control territorial.

Estos factores que contribuyen a aumentar o disminuir los efectos del proyecto y por consiguiente los impactos de estos en la comunidad, personas beneficiarias, autoridades locales y la misma CCCM, fue importante documentarlos de cara a la iniciativa de propuestas de avance y continuidad a pesar de la situación fluctuante del departamento.

Lo anterior, está directamente relacionado con el impacto social del proyecto, dado que al reconocer los factores que se pueden mitigar, se mejora la formulación e implementación de futuros proyectos, aportando información al sector sobre los



cambios esperados e inesperados en las vidas de las personas y comunidades con las que trabaja la organización.

Finalmente, para la CCCM es claro que la sostenibilidad de los impactos en municipios que no han sido entregados está sujeta al contexto; y que si bien los esfuerzos apuntan a la transformación de capacidades y desempeño de las personas beneficiarias; se requiere de una continuidad en las estrategias de prevención y protección, ampliando la acción humanitaria a estrategias integrales de apoyo.

Contexto del proyecto

La Campaña Colombiana Contra Minas (CCCM) fue asignada a operaciones de desminado humanitario en Puerto Asís (Zona 1 y Zona 2), San Miguel (Zona 2), y los municipios completos de Puerto Caicedo, Puerto Guzmán y Puerto Leguizamo el 13 de septiembre de 2016.

Inició operaciones en Puerto Asís en 2017 con Departamento de Estado de los Estados Unidos como donante y para el resto de los municipios en 2018.

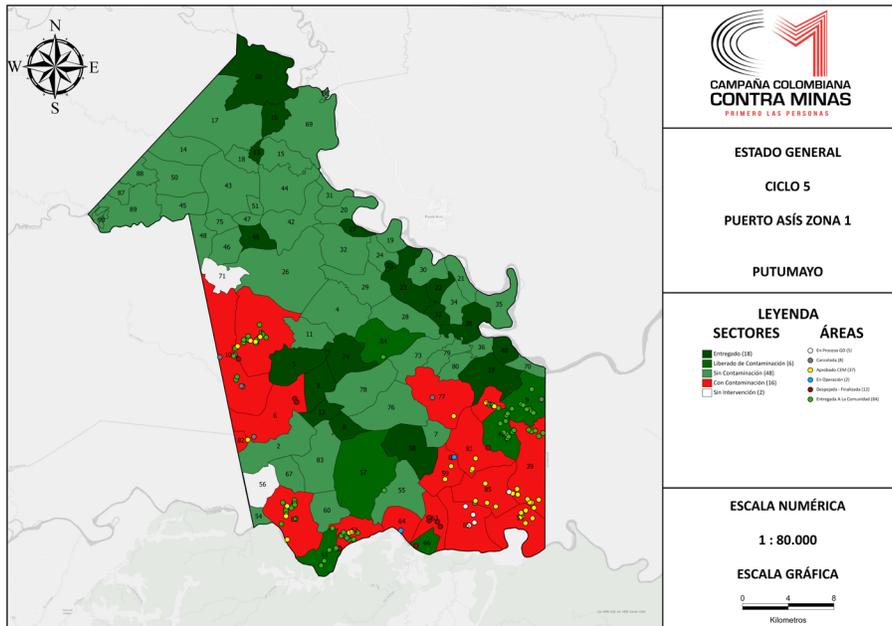
Actualmente se encuentran en intervención de desminado humanitario cinco municipios: Puerto Asís (Zona 1 y Zona 2), Puerto Caicedo, Puerto Guzmán, Puerto Leguizamo y San Miguel, los cuales también conforman la subregión PDET a nivel nacional.

Para efectos de esta evaluación, que los municipios hagan parte de los PDET es importante, dada la focalización de recursos y esfuerzos del Estado sobre estos. El aporte que se espera realizar desde estos programas no solo se direcciona al desarrollo social y económico sino a la consolidación de garantías para la población, por lo tanto, se utilizan varios elementos del diagnóstico nacional para complementar la percepción de la comunidad y abordar los impactos directos e indirectos de los beneficios.

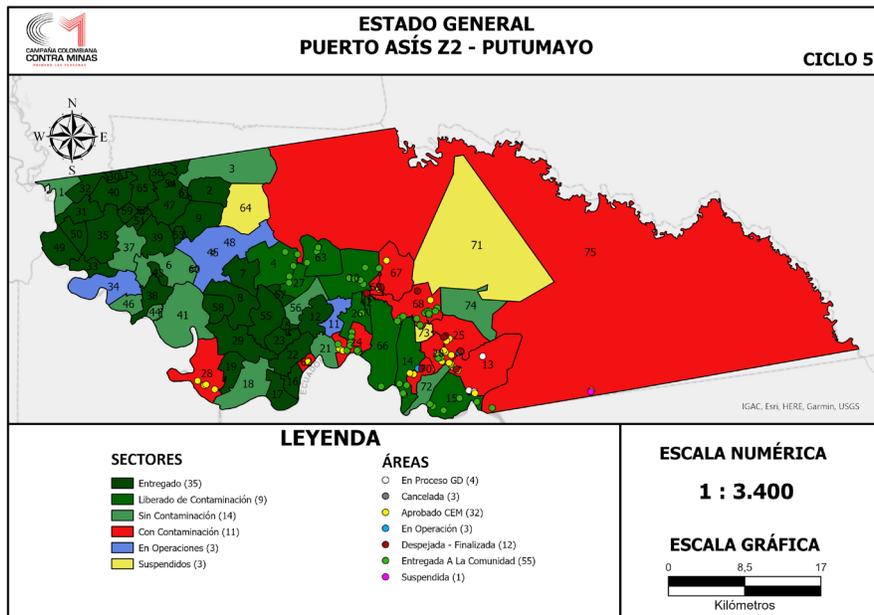
Actualmente⁴, el estado de las operaciones de liberación de tierras en los municipios es esta:

⁴ Corte Agosto 2023.

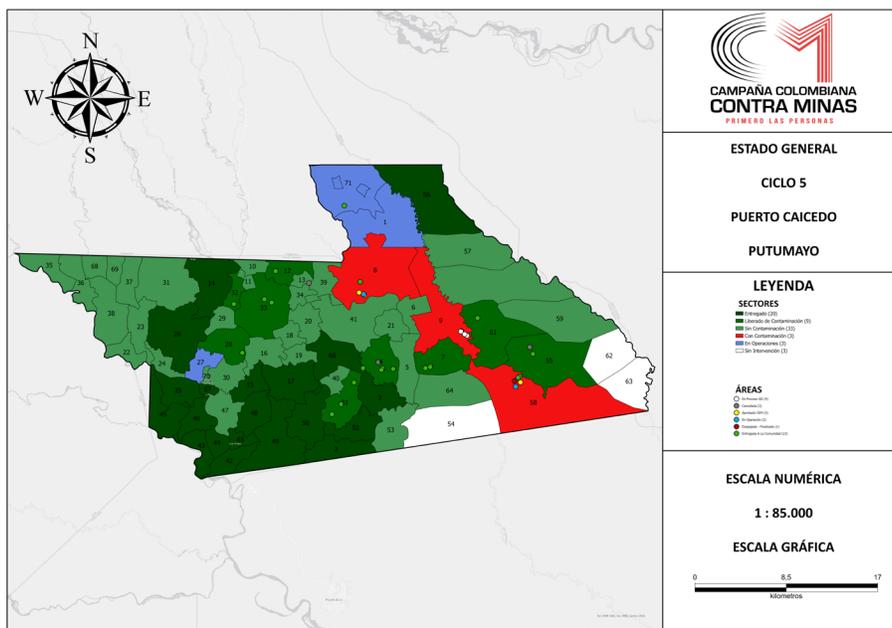
Puerto Asís (Zona 1)



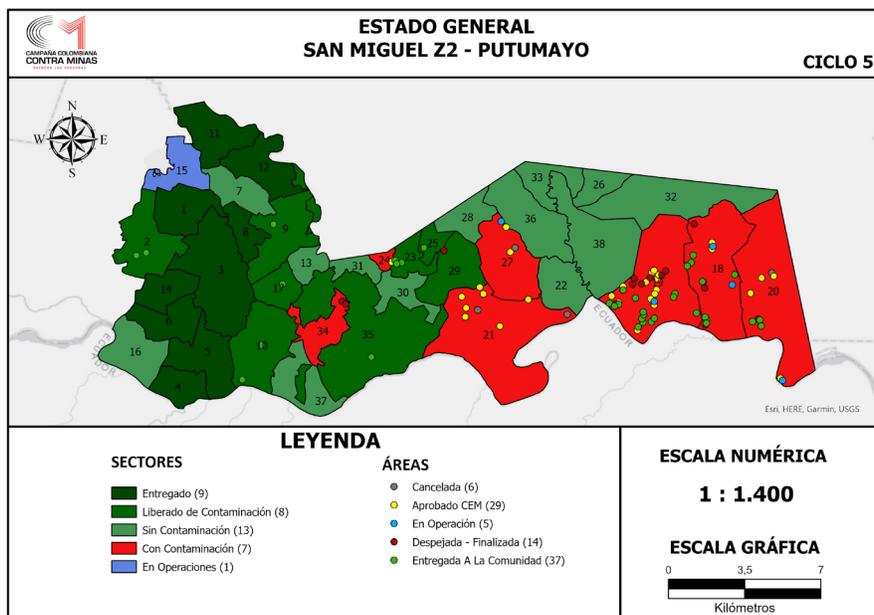
Puerto Asís (Zona 2)



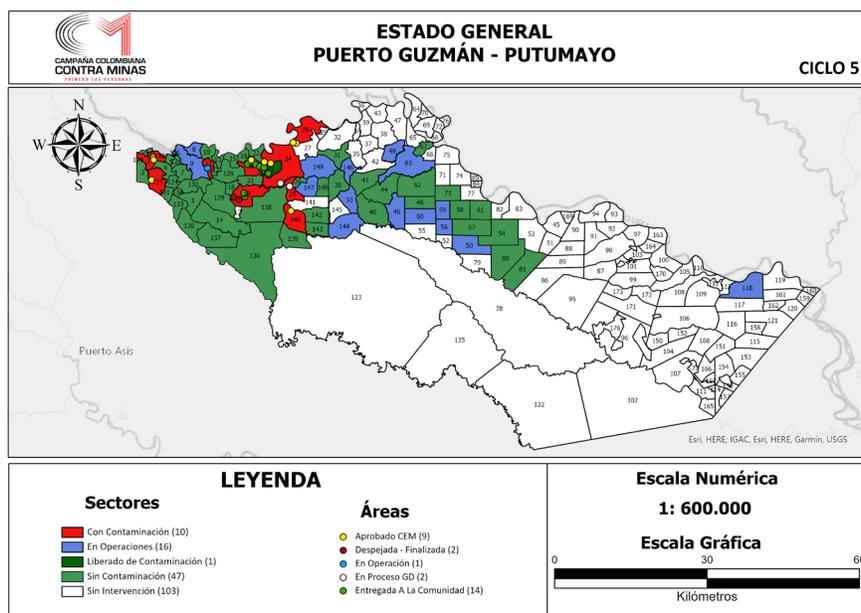
Puerto Caicedo



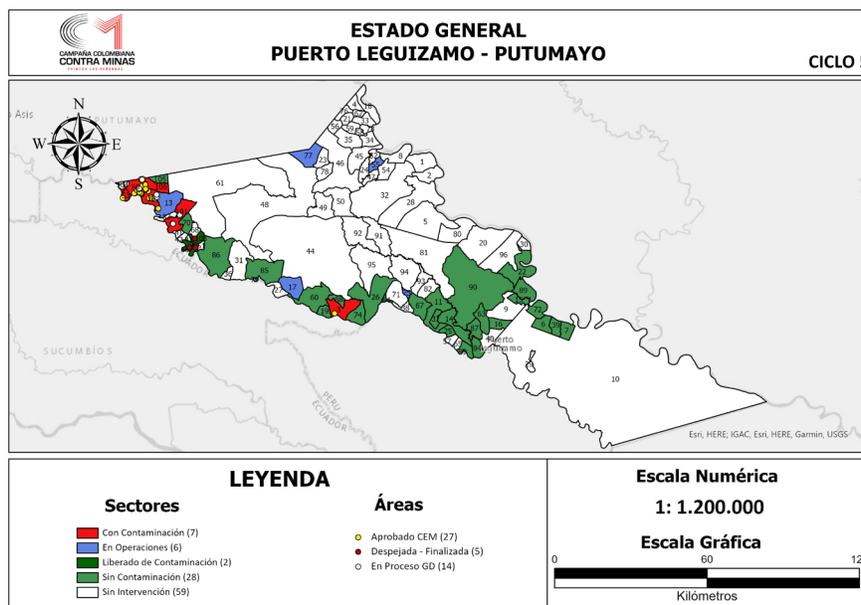
San Miguel (Zona 2)



Puerto Guzmán

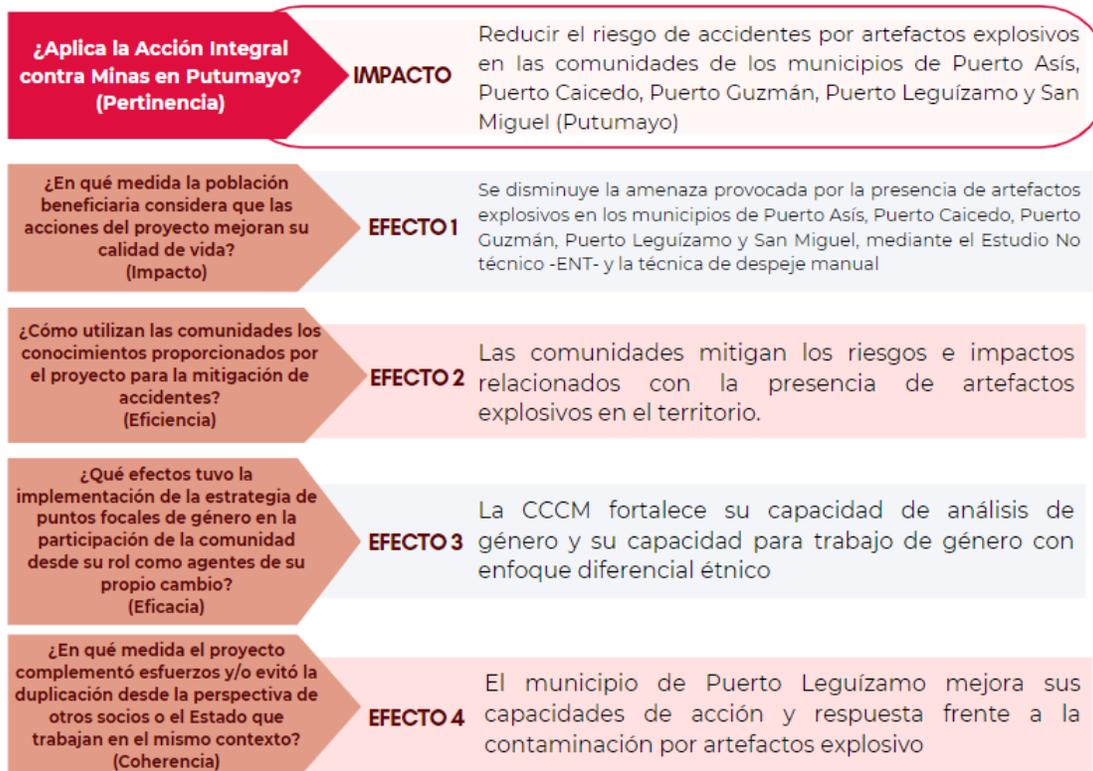


Puerto Leguizamo



De acuerdo con el marco lógico del proyecto, el impacto buscaba *Reducir el riesgo de accidentes por artefactos explosivos en las comunidades de los municipios de Puerto Asís, Puerto Caicedo, Puerto Guzmán, Puerto Leguizamo y San Miguel (Putumayo)* a partir de cuatro efectos. La tabla 3 delimita el alcance de la evaluación a partir de preguntas relacionadas con la pertinencia, coherencia, eficacia e impacto, las cuales permitirán comprobar las hipótesis y la existencia de causalidad entre los efectos y los beneficios expresados en la tabla 1.

Tabla 3. Cadena de valor del proyecto



Este proyecto hace parte de un proceso de fortalecimiento a las acciones de desminado humanitario en el departamento del Putumayo, que inició de la mano de COSUDE en el municipio de Puerto Leguízamo en 2021 y adhirió los municipios de Puerto Asís, Puerto Guzmán, Puerto Caicedo y San Miguel en 2022 con dos extensiones en tiempo que finalmente consolidaron la operación en un periodo de tiempo de un año, once meses y veintinueve días.

A continuación, se describe brevemente las fases del desminado en los cinco municipios con el donante COSUDE:

Fase 1

Dado que COSUDE y la CCCM han sido socios estratégicos desde que la organización inició sus operaciones de desminado humanitario en el municipio de Algeciras. Se solicitó el apoyo para el municipio de Puerto Leguízamo, consolidando el proyecto de Acción Integral contra Minas en el municipio proyectado a realizarse entre el 1 de diciembre de 2021 y el 30 de noviembre de 2022 con los componentes de Liberación de Tierras, Educación en Riesgo de Minas y género.

Fase 2

Teniendo en cuenta que las condiciones de seguridad no permitieron continuar con actividades de Estudio No Técnico en Puerto Leguizamo por la negativa de la comunidad a ingresar en los sectores como estrategia de salvaguarda frente a los grupos armados no estatales, y los constantes combates entre los grupos de frontera.

El 25 de febrero de 2022, la CCCM solicitó modificar el marco lógico del contrato No. 81071893, para reubicar los equipos de ENT al municipio de Puerto Guzmán y los equipos de Despeje al municipio de Puerto Asís mientras que las autoridades civiles y militares reautorizaban el despliegue de operaciones de liberación de tierras en Puerto Leguizamo. Este cambio no implicó un movimiento presupuestal.

Una segunda solicitud fue realizada el 11 de octubre de 2023 con la finalidad de redistribuir COP 793.000.000 que la organización estimó quedarían sin ejecutar a 31 de diciembre de 2022, debido a un menor volumen de gastos en transporte fluvial y otros gastos operacionales (dada la presencia reducida en Puerto Leguizamo y las economías de escala que la organización tiene en Puerto Asís); y adicionar COP 1.100.000.000 de acuerdo a lo manifestado por COSUDE en la una reunión de seguimiento y subsecuentes comunicaciones.

Esta solicitud incluyó ampliar la cobertura geográfica del proyecto, para incluir los municipios de Puerto Caicedo y San Miguel y así poder ejecutar actividades en los cinco municipios de Putumayo asignados a CCCM. Adicionalmente, permitió extender la ejecución del proyecto hasta el 30 de septiembre de 2023, ampliando las metas para los componentes de: despeje, ENT, ERM y género.

Fase 3

Finalmente, se realizó una solicitud de extensión en tiempo en agosto de 2023, teniendo en cuenta que durante el mismo año se generó un ahorro, permitiendo ampliar actividades del proyecto hasta el 30 de noviembre de 2023. Esto no tuvo cambio en presupuesto total, pero si permitió realizar el despeje de más metros cuadrados, entregar áreas, realizar talleres de ERM

Análisis de resultados

De acuerdo con la metodología, esta sección evalúa los cuatro ejes de relación causal: el primero, los aportes de la AICMA a mejorar las condiciones de vida y seguridad a través de la liberación de tierras; el segundo asociado a la contribución en las comunidades para que mitiguen los riesgos e impactos relacionados con la presencia de artefactos explosivos en el territorio; el tercero que aborda la estrategia de transversalización de género con enfoque diferencial étnico implementada por la CCCM; y el último, sobre la mejora de las capacidades institucionales de los municipios en acción y respuesta frente a la contaminación por artefactos explosivos.



Aportes de la AICMA a mejorar las condiciones de vida y seguridad a través de la liberación de tierras

Para Einer⁵, la seguridad que transmitió a la comunidad la liberación y entrega del terreno por parte de la CCCM trajo consigo beneficios como el goce y disfrute de la tierra. Considera que el proyectarse a nuevas economías sin temores por contaminación de artefactos explosivos ofrece a la comunidad nuevas perspectivas de vida que antes no eran posibles.

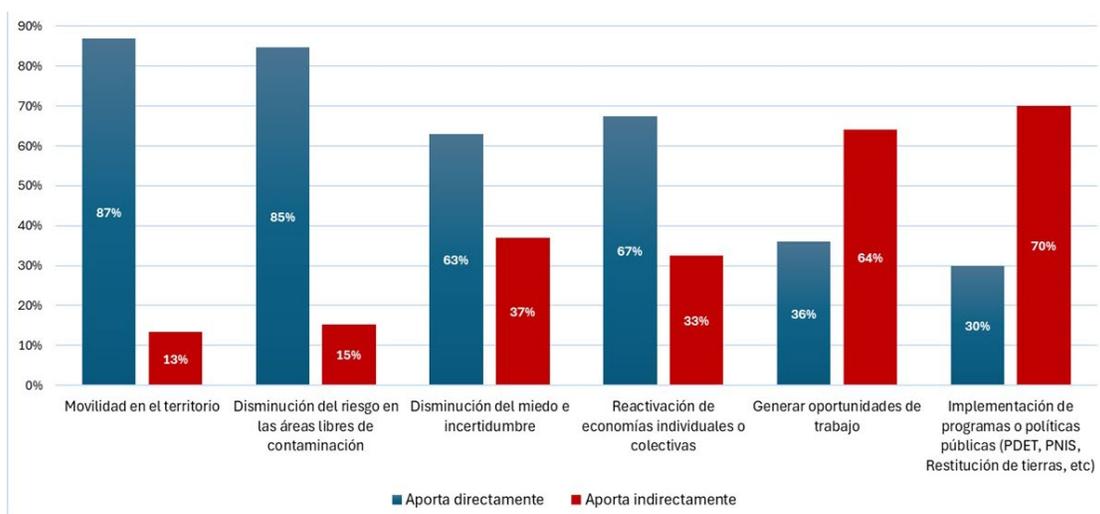
Adicionalmente, la recuperación de la confianza en el territorio por parte de la comunidad se fortaleció con la llegada de organizaciones no gubernamentales, que como ellos expresaron era algo que no había pasado antes y que demuestra el apoyo a estos territorios históricamente abandonados por el Estado.

La población coincidió en que los aportes principales del proyecto fueron la disminución del miedo y riesgo en las áreas entregadas, el libre tránsito y uso de la tierra para fines individuales y colectivos, y en casos específicos como territorios colectivos étnicos la implementación de programas y políticas públicas.

Ahora bien, en qué medida consideran que la suma de respuestas y soluciones brindadas por el proyecto mejoraron sus condiciones de vida, la gráfica a continuación lo demuestra:

⁵ Secretario Vereda El Progreso, Puerto Asís Zona 1.

Gráfico 1. Mejora en las condiciones de vida y seguridad



Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas de percepción.

De acuerdo con el gráfico 1, el promedio de los aportes directos fue del 61 %, y de los indirectos el 39 %. Los promedios más altos en los primeros fueron en las siguientes categorías de beneficiarios: La movilidad en el territorio, la disminución del riesgo en las áreas liberadas, seguidas de la reactivación de economías individuales o colectivas y, por último, la disminución del miedo e incertidumbre.

Frente a la generación de oportunidades de trabajo e implementación de programas o políticas públicas, su calificación indirecta fue más alta, lo cual indica que la relación de causalidad con las acciones del proyecto no es atribuible, por lo que se requiere la confluencia de otros factores externos asociados al rol del Estado que garantice la sostenibilidad de los beneficios que se generan a partir del proyecto.

La evaluación de los aportes directos muestra que, en distintos niveles, la Acción Integral Contra Minas Antipersonal (AICMA) tiene ventajas significativas frente a otras estrategias destinadas a reducir o eliminar artefactos explosivos, como las campañas de prevención o la restricción de caminos. Esto se debe, principalmente, a la importancia que la población atribuye a la posibilidad de transitar con seguridad y sin temor, reducir el riesgo de nuevos accidentes, reactivar economías individuales y comunitarias, retomar las actividades de subsistencia, y aprovechar las oportunidades laborales que el proyecto genera en las regiones. Además, uno de los beneficios más valorados, que despierta grandes expectativas, es la implementación de programas y políticas públicas enfocadas en la formalización y el aprovechamiento de la tierra.

Movilidad en el territorio

Los datos recopilados, principalmente de las 41 áreas entregadas en el marco del proyecto evidencian que retomar la movilidad en la tierra que habitan es el principal beneficio que

relacionó la población con la liberación de tierras. La presencia de minas antipersonal y otros artefactos explosivos había llevado a la comunidad, en 39 de las áreas entregadas, a generar otra alternativa de tránsito, pero esta era costosa y requería de más tiempo. Adicionalmente, siete de las áreas en Puerto Asís (Z1) restringían, específicamente caminos y tres, fuentes de agua.

Otro elemento para abordar los resultados en términos de movilidad es la diversidad geográfica y las condiciones de los caminos en el departamento, los cuales pueden verse afectados por lluvias, crecidas del río u otras condiciones propias del terreno.

Para don Marcial, en la vereda La Esmeralda, municipio de Puerto Asís (Z1) la instalación de minas antipersonal le quitó a él y a su familia la tranquilidad de trabajar el campo y disfrutar el río. Una vez terminaron las acciones de liberación de tierras, pudo volver a sus dos fincas y recorrerlas con tranquilidad, pero sin adentrarse mucho de donde la CCCM había marcado las áreas: *“Uno se mueve en la tierra de uno y ya”*.

Si bien cuenta que tiene algunos cultivos para subsistencia y que puede visitarlos a pie, a no más de veinte minutos, refiere que cuando llueve mucho y sube el agua debe contratar una lancha para trasladarse.

Cerca a esta vereda, esta doña Patricia, quien con su esposo vive en los Álamos, parte alta. Para ella la recuperación de sus tierras le devolvió la tranquilidad, y aunque la proyección de sus cultivos es de uso ilícito, refiere que se plantea la posibilidad de sembrar cultivos de pancoger para vender, pero las ganancias son bajas dado que el acceso a su predio está en malas condiciones y el transporte le saldría muy caro, además de que los productos se dañarían al transportarlos.

Por otra parte, en la vereda El Progreso, también municipio de Puerto Asís (Z1) doña Rubiela y don Libardo, expresan que con la liberación de caminos tienen más oportunidades de trasladar sus cultivos hasta el río para transportarlos. Sin embargo, los precios de las lanchas disminuyen las ganancias.

Este contraste da cuenta de las posibilidades que genera no solo la movilidad y desarrollo de actividades cotidianas en las tierras liberadas, sino en la conectividad entre veredas, corregimientos y zonas rurales dispersas, que como ya se ha mencionado requieren de un apoyo específico para mejorar la infraestructura vial y fluvial.

Disminución del riesgo, miedo e incertidumbre después de la liberación de tierras

Cuando se les consultó sobre cómo abordaban el miedo, el riesgo y la incertidumbre después de que se entregaron las áreas libres de contaminación, se generaron dos tipos de respuesta.

Para la profesora de la sede El Progreso, el lugar donde explotó la mina antipersonal en la vereda es intransitable, aunque hayan realizado las labores de despeje. Expresa que aún tiene

miedo porque cuando ocurrió el accidente la onda fue tan fuerte que la alcanzó, aunque sin afectaciones físicas.

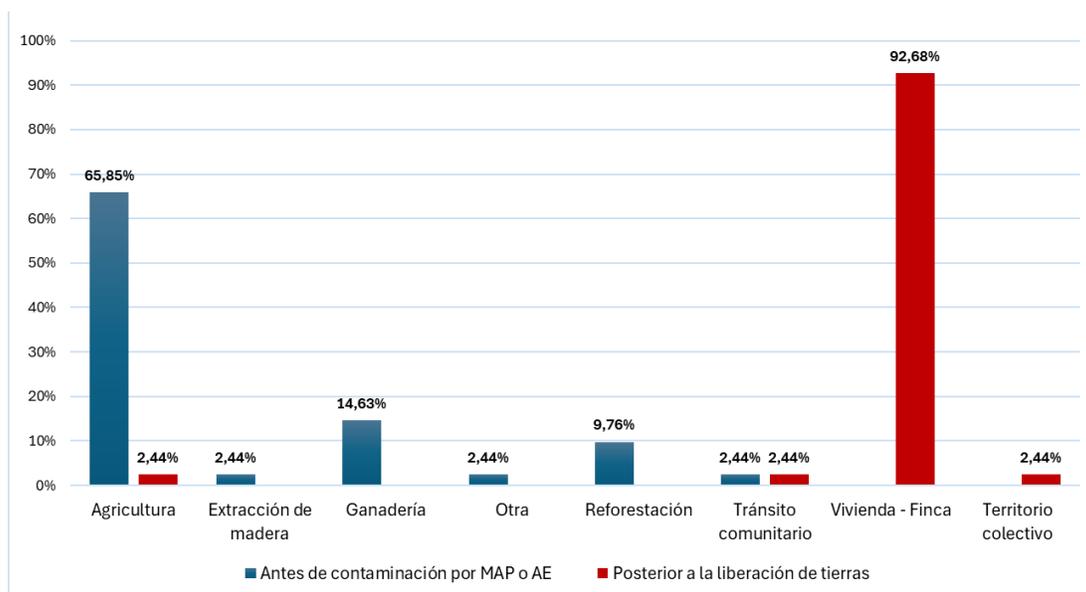
Por el contrario, la presidenta de la misma vereda contó que el miedo disminuyó en gran medida por lo que transita con tranquilidad los caminos. Sin embargo, fuera de las áreas donde la CCCM ha realizado acciones tiene siempre la incertidumbre porque no sabe si ha habido nuevas instalaciones o si las crecidas del río han desenterrado nuevas minas.

Esta incertidumbre, es más puntual donde la CCCM u otras organizaciones de desminado humanitario no están. Para la población la confianza en la organización les ha permitido retomar muchos aspectos de su vida y continúan solicitando la Educación en Riesgo de Minas para mitigar posibles nuevos accidentes, de tal forma que cuando transiten otros territorios diferentes a los suyos estén alertas a señales de posibles riesgos.

Reactivación de economías individuales o colectivas

Al finalizar las labores de liberación de tierras en los municipios asignados de Putumayo, con un total de 44.392 m² despejados, se pudo contrastar el uso previo a la contaminación de las 41 áreas entregadas a la comunidad y el uso posterior actual.

Gráfico 2. Uso de las áreas liberadas entregadas



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de gestión de información CCCM.

Dos elementos llaman la atención en el gráfico 2. La disminución en las opciones del uso potencial de la tierra posterior al desminado humanitario y el aumento del uso para vivienda – finca.

Frente al primero, las personas propietarias directas de tierra liberada expresaron que la diversificación de los usos en relación con la economía depende de factores externos como el

transporte, la capacidad de invertir y la situación de control territorial por parte de los grupos armados.

Para la señora Rubiela, como otros propietarios de áreas, impulsar cultivos como el cacao, el plátano y la yuca son el punto de partida para mejorar su calidad de vida. Sin embargo, la salida de estos productos depende de si sus predios o fincas están cerca de caminos o ríos, si tienen transporte, o incluso si tienen donde venderlos.



En cuanto al aumento del porcentaje para uso de la tierra en vivienda – finca, responde a que la definición de *finca* recoge acciones de agricultura a pequeña escala para seguridad alimentaria. Por lo que la comunidad, no considera que deba desagregarse su uso cuando no hay elementos que permitan decir que es una producción de cultivo, animales u otros elementos a gran escala.

Otro uso posterior, es para territorios colectivos, que en los municipios del proyecto es fundamental de cara a la alta presencia de comunidades organizadas tanto en Juntas de Acción Comunal (JAC), como en consejos comunitarios y resguardos indígenas.

Por último, el cambio de gobierno y la construcción de un plan de desarrollo a nivel municipal representa una oportunidad, como lo mencionó el alcalde electo de Puerto Caicedo, para apoyar la reactivación económica de las familias que dependían de la plantación y comercialización de la hoja de coca.

“Se cumplen dos años (2022 y 2023) de crisis cocalera, y en estos municipios que han sido dependientes de la coca es el momento oportuno de dejar de manera voluntaria el cultivo porque ya no es rentable ni se puede comercializar”.

La dependencia de este cultivo de uso ilícito para la subsistencia ha disminuido y apostarle a la transformación de alimentos, como el chontaduro es potencia para seguir promoviendo la sustitución por vías que no incluyan el PNIS; porque de acuerdo con la percepción de la comunidad, estos programas no han funcionado y su impacto ha sido más negativo que positivo por la presencia del Ejército en los territorios donde convergen varios grupos armados no estatales.

Así pues, se requiere de proyectos a largo plazo que recuperen la seguridad alimentaria y promuevan un cambio cultural en cuanto a la dependencia de economías ilegales. Aprovechando las condiciones geográficas y presencia de empresas como las petroleras, que

apoyan proyectos económicos para diversificar la inversión y llegar a un nivel de productividad más alto.

Oportunidades de empleo

La percepción sobre este beneficio es que es un aporte indirecto porque las fuentes de empleo presentes en el municipio no alcanzan a cubrir las necesidades de la población.

De acuerdo con funcionarios públicos, las principales fuentes de empleo formal son la alcaldía municipal y el hospital, que en los municipios que abarca el proyecto oscila entre 100 y 120 vacantes disponibles. Seguidas de estas dos opciones están las empresas petroleras, como Grant Tierra, que ofrecen entre 20 y 30 vacantes; y finalmente, organizaciones no gubernamentales, como la CCCM que ofrece entre 30 y 40 vacantes.

En cuanto al equipo territorial y la comunidad, la compra de suministros (comida, materiales, insumos, gasolina, entre otros) para el desarrollo de las acciones de desminado humanitario es una forma de aportar a los ingresos individuales y colectivos más no generación constante de empleo.

Finalmente, la población entrevistada coincide en que los aportes a la generación de empleo no alcanzan para cambiar la dinámica de desempleo en departamentos como Putumayo, que alcanzó niveles de desocupación del 17,4 % en el primer trimestre de 2023, según el DANE⁶.

Implementación de programas o políticas públicas

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial

De acuerdo con el decreto Ley 893 de 2017 se crean los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)⁷, cuya prioridad son los territorios más afectados por el conflicto armado, la pobreza y el abandono estatal. En este sentido, se identificaron 170 municipios que se agruparon en 16 subregiones PDET.

El departamento del Putumayo fue seleccionado como una subregión con nueve municipios, de los cuales, cinco hacen parte del proyecto.

Desde su misionalidad y en armonía con lo que las poblaciones manifiestan, la CCCM considera la AICMA como aporte a la seguridad humana y el desarrollo local, por lo tanto, las necesidades y expectativas de los destinatarios de las acciones se relacionan con las posibilidades que tiene un municipio PDET, desde la asignación de recursos, atención al campo y la inclusión de la población rural y étnica en el desarrollo de iniciativas.

⁶ <https://www.dane.gov.co/files/operaciones/GEIH/bol-GEIHRegiones-1Sem2024.pdf>

⁷ Función Pública. (2017). Decreto Ley 893 de 2017. <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=81856>

En este sentido, Colombia continúa con la implementación del Acuerdo Final de Paz, que involucra a los PDET y sus 8 pilares⁸, como una forma para alcanzar la transformación estructural del campo y crear condiciones de bienestar para la población rural.

A continuación, se detallan los proyectos en ejecución; iniciados en 2021 y terminados a corte de 2023 por municipio.

Tabla 4. Proyectos asociados a política pública en los cinco municipios

Proyectos	Puerto Asís	Puerto Caicedo	Puerto Guzmán	Puerto Leguizamo	San Miguel
En ejecución	701	727	394	240	625
Terminados	11	8	14	9	14
Fuentes de financiación					
PGN* ⁹	4	3	4	7	2
SGR**	70	17	20	22	26
Territorio***	937	715	384	220	611

Fuente: Elaboración propia con información del Departamento Nacional de Planeación/Mapa de inversiones, 2024.

Si bien no se puede asegurar que el desarrollo y asignación de estos proyectos esté directamente relacionado con el desminado humanitario; si tiene relevancia para la valoración de los proyectos de inversión pública, que tienen como parte de sus criterios: el impacto regional, población beneficiada, y la prioridad continua según las políticas del gobierno¹⁰.

No obstante, y de acuerdo con la percepción de la institucionalidad los PDET no han sido implementados como se esperaba y la descentralización de funciones hacia alcaldías y gobernaciones no ha sido acompañada con recursos financieros. Ejemplo de esto es lo mencionado por una funcionaria en Puerto Asís:

“Se tiene registro de un promedio de 700 víctimas para atención inmediata y la capacidad de respuesta que tengo son 20 millones”

⁸ Pilar 1: Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso del suelo, Pilar 2: Infraestructura de tierras, Pilar 3: Salud Rural, Pilar 4: Educación Rural y Primera Infancia, Pilar 5: Vivienda rural, agua potable y saneamiento básico rural, Pilar 6: Reactivación económica y producción agropecuaria, Pilar 7: Sistema para la garantía progresiva del derecho a la alimentación y Pilar 8: Reconciliación, convivencia y construcción de paz.

⁹ * Presupuesto General de la Nación

** Sistema General de Regalías

*** Recursos propios del municipio o departamento.

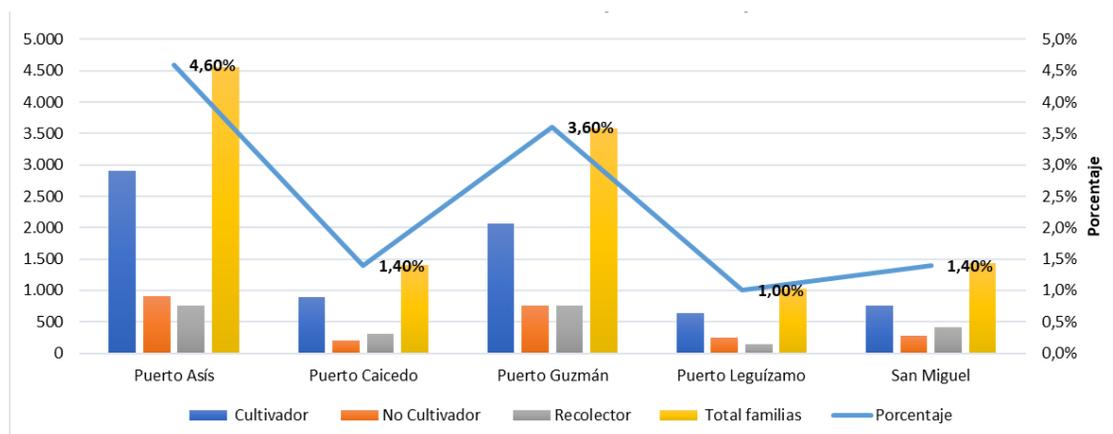
¹⁰ <https://mapainversiones.dnp.gov.co/Infografias/InfoPriorizacion>

Esta situación es recurrente en los otros cuatro municipios donde la gestión territorial no alcanza para dar respuesta a los programas de desarrollo social y económico; y las proyecciones frente a la implementación municipal no es clara.

Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS)

Para la mayoría de la población, la implementación del PNIS no ha sido adecuada y representa un riesgo tanto para ellos como para las organizaciones que realizan acción humanitaria por los niveles de violencia que se generan alrededor de estas acciones.

Gráfico 3. Porcentaje de familias vinculadas al PNIS por municipio



Fuente: Elaboración propia con datos Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), 2022.

En los cinco municipios se identifica que la mayoría de población vinculada son cultivadores que alcanzan un promedio de participación de 2,4 % a nivel familiar. Los propietarios de áreas liberadas de contaminación que se han vinculado al PNIS son dos, en la vereda La Esmeralda y en Teteyé.

Ambos han presentado pérdidas en estos cultivos, por la falta de una cadena de comercialización eficiente que dignifique el trabajo del campesino. Sobre esto, don Marcial comenta:

“La coca es lo que da el sostenimiento por aquí. Yo también sembré una vez como 2.200 colinos de piña y terminé regalando todo eso aquí en la carretera.”

La crisis cocalera como la han denominado algunos sectores del Putumayo, aunque ha debilitado el uso de la tierra para estos fines, no alcanza a tener un impacto en la reactivación económica de cultivos que aporten a la soberanía alimentaria. Para la comunidad, la siembra de cultivos legales es algo fluctuante por la caída de precios, las condiciones climáticas y la ausencia de cadenas de comercialización que lleguen a las veredas y corregimientos.

En contraste, en la finca El Naranjal, Jesús Olmedo, está a la espera de aprobación para sembrar caucho y cacao. Menciona que hace un mes presentó documentación para acceder

a un proyecto productivo y considera que las posibilidades para ganar la asignación son altas. Expresa gran satisfacción por tener disponibles sus áreas no solo para nuevos cultivos, sino para rescatar su tradición de la siembra.

En Puerto Guzmán, el resguardo Indígena La Aguadita espera con la entrega del área que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) realice acciones para fortalecer sus planes de vida.

A partir de lo anterior, la comunidad expresa que recuperar la confianza en la institucionalidad requiere de unas acciones sostenibles en las zonas rurales dispersas. Por lo que solicitan vincular la implementación de programas y proyectos en las zonas donde se realiza el desminado humanitario para sostener los beneficios que se han logrado.

Consideran que el uso de las áreas para actividades económicas será directamente proporcional con el apoyo que reciban, bien sea de la institucionalidad o de otras organizaciones presentes en el territorio. Mientras tanto, la quema y limpieza de áreas, más el cerco es la estrategia comunitaria para mitigar la nueva instalación de artefactos explosivos. Aunque la situación actual de disputa por control territorial y de economías ilegales por parte de los grupos armados limita las garantías de seguridad a futuro, dentro y fuera de las zonas donde se desarrolla la AICMA.

Contribución a las comunidades para que mitiguen los riesgos e impactos relacionados con la presencia de artefactos explosivos en el territorio

La sección anterior mostró los aportes directos e indirectos que la comunidad percibe a partir de la AICMA en las condiciones de vida y seguridad.

El proyecto Acción Integral contra Minas en cinco municipios de Putumayo demostró ser una respuesta pertinente a la crisis humanitaria que viven las poblaciones afectadas por la presencia de minas antipersonal y otros artefactos explosivos. Le ha retornado a la comunidad la seguridad para transitar el territorio, le ha garantizado bajo las condiciones de dignidad la tranquilidad de promover el uso de los predios; y ha convocado a la institucionalidad a consolidar sinergias con las comunidades para reactivar proyectos de desarrollo social y económico.

El impacto positivo en la cotidianidad de las familias y comunidades que habitan las áreas que fueron liberadas se refleja en la promoción del desminado humanitario como estrategia de salvaguarda; y en la búsqueda de oportunidades para potenciar impactos indirectos en el desarrollo económico.

Los anteriores, son impactos que el proyecto ha tenido sobre los beneficiarios directos del proyecto en el componente de liberación de tierras. Ahora, *¿Qué impactos tuvo la implementación de la Educación en Riesgo de Minas en los beneficiarios directos e indirectos,*

desde su rol como agentes de su propio cambio? ¿Cómo utilizan los actores interesados los conocimientos transferidos y el intercambio de experiencias proporcionado por el proyecto en la apropiación de conocimiento seguros? Son las preguntas que se resolverán en el siguiente apartado.

Apropiación de aprendizajes en ERM



Durante el periodo del proyecto (diciembre 2021 a noviembre 2023), se desarrollaron talleres con comunidades, autoridades locales e instituciones educativas. Aunque las metas de ERM se mantuvieron exclusivamente para Puerto Leguizamo entre el 2021 y 2022, las necesidades urgentes de protección en emergencia en el municipio consideraron la ERM como una de las estrategias y componentes utilizados para mitigar el riesgo de accidentes, difundir

y generar una cultura de comportamientos seguros. Especialmente en los territorios donde el proceso de liberación de tierras no avanzó, como se esperaba, como el caso de Puerto Leguizamo, por razones de seguridad.

Esta meta durante el segundo año si aumentó y proyectó cubrir los 5 municipios de intervención. En este sentido, la meta prevista se superó en más del 400 % y 81,3 % de la población participante asumió comportamientos seguros frente a la amenaza por presencia de MAP/MSE, de acuerdo con las evaluaciones.

Para la población que participó en los talleres, los impactos de estos son directos y salvan vidas. Los comportamientos seguros que se promueven en las gráficas del rotafolio generan curiosidad en pequeños y adultos; y convoca a contar experiencias de cómo actuaron personas que en su día a día se encuentran con artefactos explosivos.

Dos escuelas fueron visitadas, en el marco de la evaluación: Sede El Progreso y la del Cabildo Sitará donde se realizaron talleres de refuerzo y se refrendó la ruta de atención.

Para los niños, niñas, jóvenes y adolescentes su experiencia fue positiva y tienen muy presentes las señales de alerta frente a posible contaminación, así como en los profesores hay una gran oportunidad de que se conviertan en replicadores.

En comunidades rurales dispersas, la comunidad educativa, entiéndase como parte profesores, familia y estudiantes; fomentan los comportamientos seguros y consolidan estrategias de cuidado colectivo. Por ejemplo, en el cabildo se espera que la población infantil continúe en el territorio y conserve sus tradiciones. Sin embargo, la seguridad y las oportunidades laborales son un factor determinante para que el relevo generacional se dé.

Por otro lado, las comunidades campesinas consideran la prevención constante para desarrollar sus actividades agrícolas una necesidad, así que solicitan más talleres de refuerzo a lo largo del territorio, comprendiendo que la cambiante situación de los grupos armados no estatales no los exime de nuevos riesgos.

Según el equipo territorial, la comunidad evidenció un cambio positivo al abordar en la esfera pública diálogos sobre la contaminación por presencia de artefactos explosivos. Inicialmente, no se atrevían a hablar sobre el tema y no participaban en los talleres. Posteriormente, y por la estrategia de enlace comunitario se pudo conocer de las afectaciones que vivía la comunidad y se tornaron más participativos los espacios, al punto que en las instituciones educativas se desarrollaron jornadas masivas de talleres para responder a la necesidad de salvaguarda. Adicionalmente, consideran que la comunidad tiene un alto nivel de réplica y atención cuando se promueven los mensajes de cuidado.

La población beneficiaria directa de los talleres valora positivamente la priorización de lugares para los talleres y la estrategia de difusión de información pública tiene un impacto más amplio y duradero cuando se articula con las emisoras presentes en las zonas rurales.

Estrategias de gestión en el territorio

La articulación con la oferta institucional y de la acción humanitaria ha sido potencial en contextos donde los espacios humanitarios se ven reducidos. La CCCM en el marco de la participación en los Equipos Locales de Coordinación (ELC), los Comités de Justicia Transicional, Consejos de Seguridad, entre otros, ha promovido la coordinación entre los actores interesados en el territorio y la promoción de acciones que acerquen la oferta presente a las comunidades más alejadas. En este sentido, la realización de brigadas de servicios a veredas y corregimientos, donde se realizan talleres de ERM y se refuerza la ruta de atención en caso de accidente o reporte de artefactos explosivos ha generado un impacto positivo y fortalecido el relacionamiento de la CCCM con la comunidad.

Otro impacto asociado a la gestión en el territorio es la inclusión de acciones encaminadas a fortalecer la AICMA en los municipios donde se desarrolla el proyecto. Particularmente, en el Plan de Desarrollo de Puerto Asís 2024 – 2027 se plasmó lo siguiente:

“Se ve la necesidad de llegar con el mensaje a través de emisoras comunitarias y que se disponga de recursos para la atención a víctimas o para educación en el riesgo de minas. También acompañamiento para ingresar donde la campaña no ha podido hacerlo. Se requiere generar una capacidad instalada de servicios especializados de rehabilitación y atención que es muy



especial por los cambios en la vida, trámites para obtener prótesis y la necesidad de disponer de recursos para asistencia a sobrevivientes” (Alcaldía de Puerto Asís, PDM. 2024)

Si bien no todas las acciones de incidencia fueron incluidas en los planes de desarrollo, en Puerto Asís y Puerto Caicedo hay acciones direccionadas a vincular la ERM y la Asistencia Integral a Víctimas en la oferta a las comunidades.

Consolidación de la estrategia de transversalización de género con enfoque diferencial étnico potencialmente replicable

Después de abordar las contribuciones de la AICMA a las comunidades, y los impactos directos a la prevención, la siguiente sección busca evaluar la estrategia de transversalización de género a partir de la satisfacción de la comunidad y la percepción de la organización. Con esto se quiere demostrar la importancia de la estrategia de Puntos Focales de Género (PFG) y los argumentos sobre los cuales se justifica la inclusión de este componente en los proyectos de la CCCM.

Percepción sobre el grado de participación de la organización en las acciones

Apoyar y transmitir son dos elementos que motivaron a Diana, Alex, Diego, Sandra, Dani y Katherine a pertenecer a los Puntos Focales de Género (PFG) de la CCCM. Esta estrategia organizacional busca transversalizar el género a nivel interno y externo, consolidando espacios seguros y promoviendo la inclusión de todos los enfoques.



La siguiente gráfica muestra los términos más recurrentes sobre los cuales el equipo ha adquirido más aprendizajes y los que consideran permite transversalizar el género a nivel interno y externo:



Inicialmente, la transversalización es comprendida como una posibilidad para trabajar con las comunidades desde la inclusión. Transformar las desigualdades es considerada la ruta, a partir de acciones como prevenir la Violencia basada en género (VBG), promover las nuevas masculinidades y deconstruir los roles y estereotipos de género.

Los PFG consideran que la estrategia de género de la organización se ha fortalecido con el tiempo, de tal forma que ya no solo es apropiada a nivel interno, sino que las comunidades han despertado la curiosidad sobre la equidad, reflejada en la composición de los equipos y la asignación de tareas sin importar el género cuando realizan liberación de tierras.

A nivel personal la mayoría expresa haber aportado a sus comunidades, desde la réplica de los aprendizajes hasta el acompañamiento en la ruta de violencias basadas en género.

Lo anterior, ha tenido un impacto positivo directo a nivel cultural, ya que la mayoría de las comunidades y los integrantes del equipo no reconocían los tipos de violencia ni cómo abordar estrategias de cuidado a personas de otra diversidad sexual.

En las charlas y talleres se concentra un gran potencial para ser desarrollado en las comunidades étnicas de cara al aumento de casos de feminicidio y persecución a la población LGBTIQ+.

La comunidad y el enfoque de género

De acuerdo con la información provista en los grupos focales y entrevistas, la comunidad no reconoce el enfoque de género. Sin embargo, si se aborda la pregunta desde la composición

de los equipos y las labores que realizan, se identifican comentarios sobre “lo parejo” de la situación y “lo extraño e interesante”.

Sobre esto Sandra nos cuenta:

“Nosotros llegamos a un campamento de despeje. La gente alrededor de nosotros, entonces nosotros hombres y mujeres pues hacemos de igual manera, la lavada de baños, barrer. Entonces cuando yo fui a la tienda me dice el señor: yo antes nunca había cogido una escoba, me dice el señor, pero yo mirando a sus compañeros, normal, dice. Entonces eso es un impacto muy grande que se deja en las comunidades.”

Las charlas en los equipos sobre las temáticas de género son otra acción que convoca la atención de las personas más cercanas.

“Un día estábamos dando una charla que nos enviaron por chat, y la señora de la casa después se acerca a decirme, que ella un día había visto una pareja de hombres y los sacó de su casa porque para ella eso no era normal.”

En estos casos, el equipo reconoció que observar es la opción que queda para no dañar ni afectar el relacionamiento con la comunidad.

Por último, consideran que el cambio iniciado en lo personal ha impactado en su familia, comunidad y equipo de trabajo, ya que se deconstruyen ideas sobre la diversidad sexual, el sentir, expresar los sentimientos, y defender la igualdad.

La AICMA mejora las capacidades institucionales de los municipios en acción y respuesta frente a la contaminación por artefactos explosivos

Las necesidades a las que el proyecto dio respuesta se clasifican en tres categorías: la primera relacionada con la liberación de tierras; la segunda con la transferencia de conocimientos para comportamientos seguros y la tercera, gestión territorial.

A continuación, se evalúa ¿En qué medida el Plan AICMA de Puerto Leguizamo corresponde a una mejora en las capacidades de respuesta del municipio? Y ¿Cómo se fortalecieron las estrategias de análisis territorial desde la cobertura del proyecto?

Plan de Acción Integral contra Minas: Puerto Leguizamo

Debido a la ausencia de garantías de seguridad, las labores de Desminado Humanitario se suspendieron en el municipio de Puerto Leguizamo y las pocas acciones de Estudio No Técnico (ENT) demuestran dos cosas:

- El reporte de accidentes o presencia de mina antipersonal y otros artefactos explosivos no hace parte de las estrategias comunitarias para mitigación de riesgos.
- La Fuerza Pública ha llevado a cabo 119 procesos de desminado militar, en el período del 2008 - 2022, generando un riesgo para la subsistencia de la población civil del municipio.

En este sentido, y en articulación con la administración municipal se promovió la construcción del documento Plan de Acción Integral contra Minas en Puerto Leguizamo como herramienta que aportaría a mejorar las acciones y capacidad de respuesta del municipio frente a la contaminación por artefactos explosivos.

Los pilares del AICMA, desminado humanitario, Educación en Riesgo de Minas, Asistencia Integral a Víctimas y Gestión territorial quedaron como líneas de acción específicas para articular a los Planes de Acción Territorial (PAT), los Planes de Contingencia y a los Planes de Prevención en aras de atenuar las afectaciones por presencia de MAP/MSE.



Para desminado humanitario, se pretendió actualizar el estado de contaminación instando a la institucionalidad a diligenciar instrumentos que permitieran sistematizar las afectaciones reportadas o conocidas.

En ERM, la sensibilización y socialización sobre los peligros se vinculó a los diferentes instrumentos de planeación; además de la propuesta de construir una *Guía de Respuesta Rápida* frente a posibles accidentes. Por su parte, en Asistencia Integral a Víctimas, se consignó la necesidad de enrutar a víctimas y sobrevivientes de manera integral, considerando atención psicosocial y actividades encaminadas a localizar y caracterizar a la población afectada a nivel municipal.

Por último, la gestión territorial buscó fortalecer a los actores interesados en la Acción Integral contra Minas y generar una matriz de oferta institucional unificada.

Ahora bien, teniendo en cuenta que las acciones de diálogo y concertación para el plan iniciaron en 2022 y terminaron en 2023, mismo año de los cambios en gabinetes de gobierno municipales y departamentales. En 2024, en el marco de la evaluación se solicitó una actualización de este plan a la administración municipal, la cual mediante oficio determinó que era necesario y por el cambio de gobierno actualizar la información contenida en el Plan AICMA, y que lo formulado se ajustara a las disposiciones de la actual administración municipal y necesidades comunitarias.

Desde la CCCM se procedió a notificar la disponibilidad del equipo territorial para llevar a cabo las jornadas de actualización en las que no solo se aborden las actividades sino el rubro

presupuestal para implementar el mencionado plan, dado que en el documento preliminar entregado no existía rubro ni fuente de gasto específica.

Lo anterior, refiere una ausencia de soporte para el Plan AICMA a nivel presupuestal en la administración municipal de Puerto Leguizamo. La capacidad de respuesta que se buscó carece de presupuesto, por lo tanto, no corresponde a una mejora en la capacidad de respuesta, dada las dificultades de que quedara vinculado al Plan de Desarrollo Municipal actual; y las dificultades que a la fecha de entrega del documento tenía el municipio en materia de AICMA.

De cara a nuevas posibilidades de articulación es importante ampliar la financiación de las acciones a otros actores interesados en la región, dado que como se ha evidenciado las administraciones de los cinco municipios priorizados carecen de recursos suficientes para desarrollar lo planeado, por consiguiente, la respuesta inmediata no es viable.

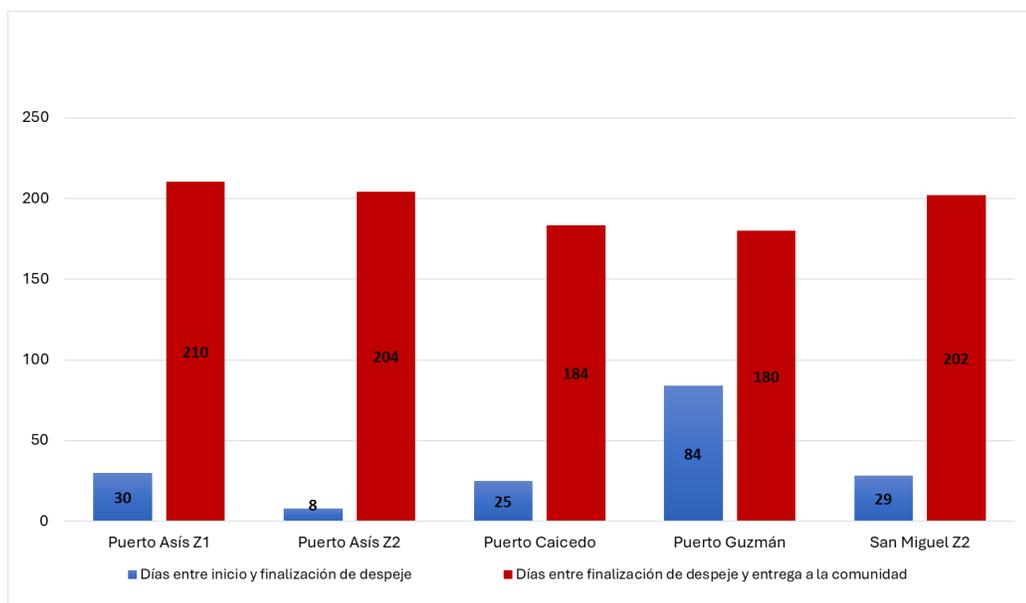
Estrategia de análisis y respuesta territorial

En este apartado se abordan cuatro acciones que han permitido a la CCCM fortalecer su capacidad de análisis territorial, promover el enfoque de Acción sin Daño y avanzar en el proceso de Desminado Humanitario a partir de estrategias de cuidado basados en el relacionamiento comunitario.

Análisis territorial

- La recopilación de 216 ENVC permitió generar priorizaciones para los talleres de ERM más coherentes. De acuerdo con la percepción de la comunidad los lugares donde se realizaron y las personas que participaron eran los que se requerían, además de que fue bien visto que a solicitud de refuerzos la CCCM dispusiera un facilitador o equipos que pudieran dar los talleres.
- La capacidad de los municipios frente a la Difusión de Información Pública ha permitido que los comportamientos seguros tengan más alcance mediante el uso de herramientas como el WhatsApp, que funciona mejor en zonas rurales dispersas que no cuentan con los servicios de energía o antena satelital.
- La estrategia de género ha podido mejorar los análisis territoriales y la inclusión de lineamientos étnicos a partir de los encuentros interculturales y el diálogo de saberes que permite la vinculación de población étnica al equipo regional, que como se percibió en el apartado de la transversalización del género, han asumido un compromiso al interior de su comunidad de socializar y compartir los aprendizajes.
- La gráfica a continuación refleja el tiempo en días que duran las labores de despeje y el tiempo que se demora en entregar a la comunidad:

Gráfico 4. Tiempo entre inicio de liberación de tierras y entrega a la comunidad



Fuente: Elaboración propia con datos de gestión de información.

Como se evidencia el tiempo de entrega a la comunidad es superior a 6 meses, terminado el despeje, en todos los casos. Si bien la responsabilidad recae en los tiempos de aprobación del CEM -OEA, se identificaron dos impactos en el proyecto. Por una parte, hay riesgo en la eficacia de los resultados, dado que la espera prolongada de las comunidades por las áreas, sumado a la situación cambiante del conflicto armado puede exponerlas a nueva contaminación. Por lo tanto, y se conecta con el segundo impacto, la necesidad de constantes actualizaciones de estas áreas ha permitido no solo mantener al día la documentación sino poder tener una lectura del contexto casi en tiempo real y expresada por la comunidad.

Respuesta desde la CCCM a la situación territorial

Teniendo en cuenta que la orden de tareas para los municipios asignados en Putumayo a la CCCM vence en el 2025 y en aras de no dejar vencer los procesos y labores ya trabajadas en las etapas de ENT y Despeje. Desde la CCCM se planteó a la Autoridad Nacional el modelo de zonificación para las zonas ya asignadas, y en las que después de mucho tiempo de intervención y acotando los esfuerzos razonables, no se ha logrado ingresar a realizar las labores de Desminado Humanitario, bien sea por los conceptos de seguridad o por no aprobación por parte de las comunidades.

Se tomó como lección aprendida la situación presentada con la zona de Vistahermosa, Meta, que por motivos de seguridad tuvo que suspender las operaciones por un largo periodo de tiempo. Esto conllevó a que varios de los sectores se vencieran y surgieran nuevas actualizaciones en los expedientes municipales, causando finalmente que el trabajo desarrollado años atrás no tuviera el resultado deseado.

Las actividades para poder realizar esta zonificación fueron:

- Identificar los sectores con dificultad de acceso por seguridad y/o aprobación comunitaria.
- Revisión de las actas de enlace comunitario que informan de los procesos de acercamiento y seguimiento que ha venido realizando la CCCM.
- Revisión de los seguimientos de seguridad por parte de los Consejos de Seguridad que realiza las autoridades locales y el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) emitidas por Defensoría del Pueblo.
- Revisión del estado de los sectores que, si han sido trabajados, pero tienen estado de suspensión, o sectores que nunca han podido ser intervenidos.
- Analizar la estrategia operativa para determinar las zonas a intervenir.
- Agrupar los sectores que ya se encuentran trabajados y en estado de libre de sospecha de contaminación y los sectores con contaminación que ya se encuentran dentro de la planeación para trabajar en la etapa de despeje.

El objetivo principal busca finalizar las zonas asignadas y proceder a las entregas parciales para evitar vencimientos de estas.

Este proceso se adelantó en el departamento de Putumayo, teniendo en cuenta las características ya descritas y se estableció así:

Puerto Asís Z2:

Se dividió en dos zonas:

- Zona 2: sectores trabajados, finalizados y sectores con contaminación con aval para ingresar a realizar labores de DH para culminar las actividades en los sectores.
- Zona 3: sectores que no han podido ser trabajados o están en estado suspendido por conceptos de seguridad y/o no aval comunitario para adelantar labores de desminado.

Puerto Caicedo:

Se dividió en dos zonas:

- Zona 1: sectores trabajados, finalizados y sectores con contaminación con aval para ingresar a realizar labores de DH para culminar las actividades en los sectores.
- Zona 2: sectores que no han podido ser trabajados o en estado de suspendidos por conceptos de seguridad y/o no aval comunitario para adelantar labores de desminado.

Puerto Guzmán:

Debido al recrudecimiento del conflicto en los últimos cuatro años. Desde el área de operaciones y enlace comunitario, se decidió dividir en 3 zonas el municipio:

- Zona 1: sectores trabajados y finalizados. Así como los sectores con contaminación en los que se puede adelantar tareas de DH para cerrar los trabajos.
- Zona 2: sectores al borde del río Caquetá. Aquellos en los que no se cuenta con aval de seguridad para el despliegue y trabajos de los equipos de ENT y Despeje. Dados los constantes enfrentamientos en esta zona no se puede asegurar el ingreso.
- Zona 3: sectores que limitan con los municipios de Puerto Asís, Puerto Caicedo y Puerto Leguizamo. En estos la seguridad es fluctuante, dado que comprende corredores estratégicos de los grupos armados, y por lo tanto es objeto de enfrentamientos constantes por el control territorial. Adicionalmente, el aumento de accidentes en esta zona es constante.

Puerto Leguizamo:

Para el caso de Puerto Leguizamo, no se realizó proceso de zonificación dado que se vienen articulando esfuerzos con la Autoridad Nacional para poder ingresar a este municipio bajo el *Estándar Nacional Desminado Humanitario en zonas con factores de inestabilidad en materia de seguridad y atención a eventos puntuales*¹¹.

Por último, es importante aclarar que, el modelo de zonificación para el caso de Puerto Leguizamo no aplica, ya que la suspensión de operaciones lleva más de 3 años, y la entrega de zonas específicas requiere revisar una revisión y estudio de los sectores ya trabajados o aquellos que quedaron con áreas peligrosas identificadas. Por este motivo, para Puerto Leguizamo la continuidad de las operaciones se realizará por medio de las acciones del Estándar Nacional.

Análisis de eficiencia

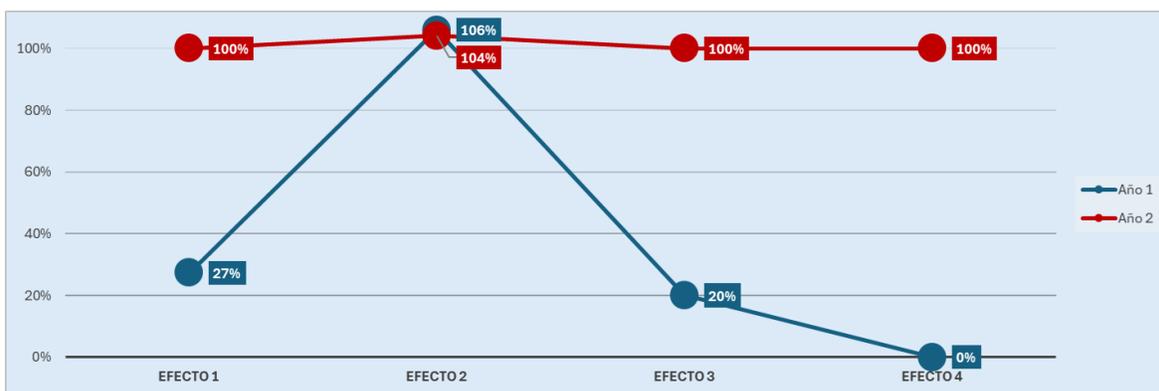
Después de abordar las contribuciones de la AICMA en los cinco municipios del Putumayo y los aportes al bienestar y prevención de riesgos de la comunidad, la siguiente sección busca analizar la ejecución técnica y presupuestal de los efectos del proyecto.

De acuerdo con la gráfica 5, la ejecución técnica en el primer año avanzó en un promedio de cumplimiento del 38%, reportando resultados para los efectos 1, 2 y 3.

¹¹ Tomado de

<https://www.accioncontraminas.gov.co/Documents/ESTÁNDAR%20NACIONAL%20DESMINADO%20HUMANITARIO%20EN%20ZONAS%20CON%20FACTORES%20DE%20INESTABILIDAD%20EN%20MATERIA%20DE%20SEGURIDAD%20Y%20ATENCIÓN%20A%20EVENTOS%20PUNTUALES%20-%20FIRMADO%20IIDH.pdf>

Gráfico 5. Ejecución técnica



Fuente: Elaboración propia con datos del informe técnico final.

El comportamiento del efecto 2, se relaciona con los aportes mencionados por las comunidades. La adopción de comportamientos seguros a partir de la sensibilización corresponde al impacto directo más importante; y aunque para el segundo año disminuyó el porcentaje de cumplimiento, las comunidades perciben un cambio en el comportamiento que ayuda a prevenir nuevos riesgos y promueve la seguridad en las estrategias internas de autocuidado comunitario.

Aunque en el informe final del proyecto se mencionó que la eficacia del efecto 1 estaba por debajo del 100% por las dificultades externas en el desarrollo del Estudio no Técnico. El efecto esperado se cumplió no solo en los indicadores asociados al 100% de áreas demarcadas y la mejora en las condiciones de vida y seguridad de las personas a través del despeje, sino desde la percepción de la comunidad y propietarios directos de áreas; que identificaron en los apartados de contribución y aporte disminución en el miedo, inseguridad y amenazas provocadas por la presencia de AE.

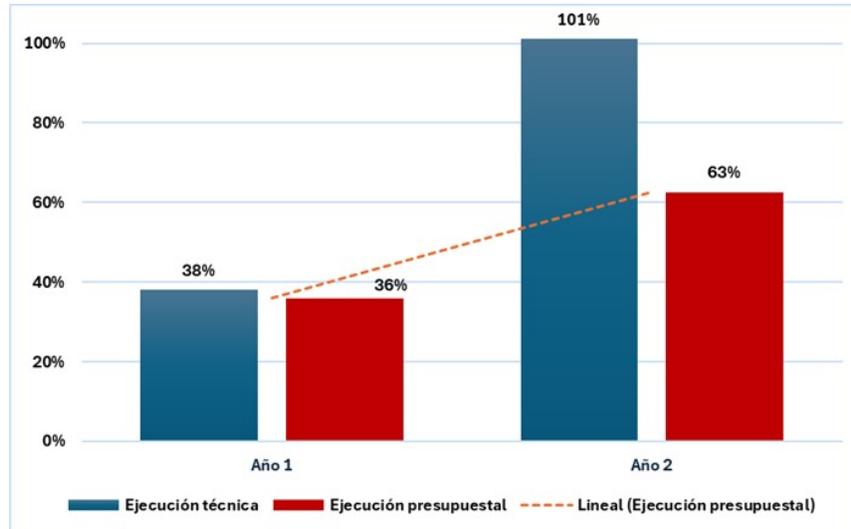
Frente al efecto 3, la valoración de equipos y algunas personas de la comunidad refieren una capacidad de análisis de género y trabajo con enfoque diferencial étnico instalada en la organización. Sin embargo, estos análisis deben contar con un ejercicio de difusión y promoción a nivel nacional y regional, consolidando una implementación integral de la organización que impacte en la medida de lo posible los espacios de participación e incidencia que acompaña.

Por último, el efecto 4 cumplió técnicamente, de acuerdo con la evaluación de capacidades y necesidades del municipio frente a la contaminación por AE; y en la construcción del Plan AICMA. Sin embargo, este no logra ser un instrumento que mejore la capacidad de respuesta a nivel municipal dada las dificultades de financiación y vinculación en la política pública.

Como iniciativa de articulación interinstitucional representa una oportunidad para que las organizaciones e institucionalidad presentes en el territorio potencialicen los esfuerzos y se evite la duplicidad de esfuerzos.

Ahora bien, la comparación de los porcentajes de ejecución presupuestal y técnico en la gráfica 6, dan cuenta de la correlación con el gasto y el cumplimiento de los efectos del proyecto.

Gráfico 6. Comparación porcentajes de ejecución



Fuente: Elaboración propia con datos del informe financiero.

Por una parte, la ejecución presupuestal fue del 98,6 % y los efectos del proyecto alcanzaron una eficacia del 100 %, respectivamente lo que permite inferir que la Acción Integral contra Minas en cinco municipios de Putumayo fue eficiente en términos generales. Aunque, por otro lado, se deben considerar las necesidades financieras para desagregar los gastos de acuerdo con los efectos del proyecto y por cada municipio. Esto se amplía en el apartado de recomendaciones.

Valoración de los beneficios percibidos por la comunidad

Para la CCCM, la identificación de los cambios a partir del proyecto se requiere para asignar una relación de causalidad. Es decir, ¿los beneficios que la comunidad percibió son atribuibles a la organización? o en ¿qué medida los resultados del proyecto contribuyeron a los cambios?

La tabla a continuación da cuenta del aporte que la comunidad considera que el proyecto tiene sobre: la seguridad, el desarrollo local, los comportamientos seguros, la satisfacción y el aprendizaje organizacional.

Tabla 5. Categorización de aportes directos e indirectos del proyecto

Impactos	Beneficios	El proyecto aporta directamente	El proyecto aporta indirectamente
Seguridad	Movilidad en el territorio	87%	13%
	Disminución del riesgo en las áreas intervenidas	85%	15%
	Disminución del miedo e incertidumbre en el municipio, zona urbana, rural	63%	37%
Desarrollo local	Reactivación de economías individuales o colectivas	67%	33%
	Generar oportunidades de trabajo	36%	64%
	Implementación de programas o políticas públicas (PDET ¹² , PNIS ¹³ , Restitución de Tierras, etc.)	30%	70%
Comportamientos seguros	Apropiación de los aprendizajes adquiridos en Educación en Riesgo de Minas (ERM)	100%	
	Cobertura de las actividades y de quienes se benefician	100%	
	Fortalecimiento de la gestión en los territorios	53%	47%
Satisfacción	Percepción sobre el grado de participación de la organización en las acciones	100%	
	Satisfacción de la comunidad con el desarrollo de las acciones	100%	
Aprendizaje organizacional	Aprendizaje integral adquirido por la organización	93%	7%
	Adecuación de las actividades y herramientas al contexto y comunidad	87%	13%

El proyecto aportó directamente en un 77 % a los impactos identificados. Por una parte, los impactos directos son en la seguridad, la adquisición de comportamiento seguros, la satisfacción con las labores y el aprendizaje organizacional. Por otra, los impactos al desarrollo local son indirectos, en la medida que dependen de factores externos para ser sostenibles.

Así pues, la CCCM se atribuye los cambios en la percepción de seguridad de las comunidades para movilizarse en su territorio y la recuperación de la confianza. Adicionalmente, los cambios en los comportamientos seguros que han permitido mitigar los riesgos y fortalecer la gestión

¹² PDET: Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial

¹³ PNIS: Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos

en los territorios de las propias comunidades; quienes además refieren la pertinencia con que se planean las actividades de ERM y la población que se convoca.

En cuanto a la satisfacción de la comunidad con la labor de la CCCM y el aprendizaje organizacional, se valora positivamente la estrategia de relacionamiento con la comunidad y partes interesadas en los municipios.

A nivel externo, la organización se encuentra consolidada como un referente de confianza y apoyo para la comunidad; y un actor estratégico para la institucionalidad y la acción humanitaria. Internamente, se encuentra en un proceso de fortalecimiento de capacidades con el objetivo de aportar a la estrategia de transferencia de conocimiento a otras organizaciones.

Lecciones aprendidas

Esta sección presenta las lecciones aprendidas del proyecto Acción Integral contra Minas en cinco municipios del Putumayo, referente a su contribución y aporte a las comunidades, equipos y beneficiarios directos de las actividades.

Contribución y aportes de la AICMA a la mejora en el bienestar y la seguridad

La CCCM a través del proyecto ha contribuido no solo al reconocimiento de las afectaciones que genera la presencia de artefactos explosivos, sino también a la promoción de estrategias de autocuidado en las comunidades beneficiarias.

En la actualidad el impacto de la ERM en la salvaguarda de la vida se refleja en la vinculación de esta a los planes de riesgos de los municipios y su mención en los planes de desarrollo, que, aunque no cuentan con financiación directa hacen parte de las capacidades de los municipios y se potencializa cuando los actores interesados la vinculan a su oferta de servicios.

Para la CCCM una forma de llegar a las zonas rurales más dispersas ha sido la participación en brigadas de atención, donde se descentraliza la oferta de servicios institucional y de la acción humanitaria.

Otra forma ha sido priorizar la realización de talleres de ERM en instituciones educativas grandes, de tal forma que se pueda alcanzar la mayor cantidad de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, además de la planta docente, la cual representa un pilar en la comunidad por su rol de enseñanza. Adicionalmente, formar a los equipos de ENT para que estos puedan replicar los talleres de necesitarse



en la inmediatez, ha permitido la pertinencia y sostenibilidad de la difusión de información sobre los comportamientos seguros.

Frente al desarrollo social y económico de las comunidades, la CCCM promueve desde su rol interdependiente la comunicación y vinculación de los territorios con la institucionalidad, de tal forma que en los procesos de rendición de cuentas se prioricen estas familias en los programas y proyectos que se desarrollan a nivel local. Sin embargo, y de acuerdo con lo que mencionan los funcionarios los recursos no son suficientes y los procesos de priorización no son equitativos.

Para la CCCM, el aporte al desarrollo de las comunidades depende de la pertinencia del Estado en dos vías: la recuperación de garantías de seguridad, y la implementación de programas y proyectos adecuados a las necesidades de las comunidades desde los enfoques diferenciales.

Desarrollo de capacidades

A nivel interno, la organización está en un proceso de internacionalizar su experiencia desde la estrategia de transferencia de conocimiento. Esto, ha llevado a identificar oportunidades de mejora en la forma como se transfieren internamente los aprendizajes, de tal forma que los procesos formativos apunten a la integralidad y no solo aborden la capacidad operativa y las normas técnicas, sino los procesos transversales propios que la organización ha fortalecido a través de los años.

En este sentido, se fortaleció la gestión de proyectos con la contratación de una persona encargada de la evaluación de impacto a nivel organizacional; y una persona encargada de la estrategia de gestión de conocimiento.



Con estos nuevos procesos la organización espera abordar su *qué hacer* y *cómo hacer* desde un enfoque de promoción de capacidades, mejorando la eficiencia de sus acciones, tanto operativas como financieras; y generando condiciones de sostenibilidad.

La consolidación de un banco de lecciones aprendidas, la evaluación de resultados para los proyectos y la vinculación de la comunidad a los procesos de monitoreo y evaluación son parte de las acciones que espera fortalecer a la organización en su respuesta a las necesidades humanitarias y al sector de la AICMA.

Por último, la capacidad de adaptabilidad a nuevos retos que propone la cooperación internacional y partes interesadas en la acción humanitaria han llevado a la organización a convertir los planes de mejora en herramientas de mejoramiento continuo que le permitan moverse en tres niveles: estratégicos, tácticos y operacionales. Consolidando su oferta de

valor pensada hacia una organización que aporta a la construcción de paz desde la seguridad de las comunidades y la promoción de comportamientos seguros.



Aprendizajes y oportunidades de mejora del proyecto

En la evaluación de impacto se identificaron aprendizajes que reafirman el potencial de este tipo de proyectos. Así mismo, oportunidades de mejora interna para fortalecer procesos y movilizar nuevos.

Aprendizajes

- Demuestra que contribuir a la seguridad y mejora en el bienestar de la comunidad habilita condiciones para el desarrollo de las comunidades afectadas por la presencia de artefactos explosivos.
- El buen relacionamiento de la CCCM con la comunidad ha permitido recuperar la confianza de estas en las organizaciones presentes en el territorio y en la misma institucionalidad.
- La participación e incidencia de la CCCM en espacios locales y regionales le ha permitido posicionarse en el territorio como un actor estratégico que transita bajo los principios de protección comunitaria.
- Formar adicionalmente a los equipos de ENT en Educación de Riesgo de Minas, permitió aumentar la cobertura en la población y territorios que reciben los mensajes de prevención y fortalecimiento de comportamientos seguros, específicamente en los municipios con mayor afectación y que no cuentan con condiciones de seguridad para realizar operaciones de Desminado Humanitario, como es el caso de Puerto Leguízamo.

- El enfoque de Acción sin Daño le ha permitido a la CCCM permanecer en el territorio desde un análisis constante de contexto. El aval comunitario ha sido la principal herramienta de inicio de actividades, evitando poner en riesgo a la población y a los mismos equipos.
- La constante comunicación y reporte de actividades a la administración municipal ha reforzado las estrategias de seguridad de la CCCM, además de que el canal de apoyo frente a cualquier accidente por artefacto explosivo es eficiente.
- La estrategia de Puntos Focales de Género ha tenido un alcance más amplio cuando vincula a integrantes de las comunidades étnicas. A partir de esta acción el acceso a territorios étnicos ha sido más eficiente y se han podido desarrollar más talleres de ERM con esta población.
- La contratación de personal local como parte de la estrategia de entrada de la organización se ha convertido en el primer eslabón de confianza con el territorio, no solo por las oportunidades laborales que genera sino por la confianza que brinda a las comunidades, que personas del territorio sean las que realicen las entrevistas de ETN, dispongan los campamentos, dialoguen con los presidentes de Juntas de Acción Comunal y realicen los talleres de ERM; por mencionar algunas acciones estratégicas.
- La sólida relación entre la CCCM y la autoridad nacional facilitó la elaboración de una estrategia para mitigar las dificultades asociadas con la realización de acciones de desminado humanitario en ciertas zonas, afectadas por el recrudecimiento del conflicto armado y la inestabilidad de los grupos armados no estatales. Se espera que el proceso de zonificación, ya propuesto y aprobado, no solo permita el acceso a estas áreas, sino también garantice la entrega de territorios libres de contaminación, asegurando que el esfuerzo realizado no sea en vano y que las comunidades puedan utilizarlos de manera segura.

Oportunidades de mejora

En comprensión de los desafíos que representa la Acción Integral contra Minas en el departamento del Putumayo, y en los cinco municipios asignados, la CCCM ha consolidado un plan de mejoramiento a partir de los hallazgos de la auditoría de COSUDE que no solo comprende los puntos del plan de evaluación sino a nivel organizacional, a saber: seguimiento financiero, comunicación y flujos de procedimiento.

Ahora bien, en el marco de la evaluación de impacto se identificaron como oportunidades de mejora:

Organizacional

- Garantizar el almacenamiento seguro y la gestión de la información, a través de la implementación de sistemas efectivos para la salvaguarda, protección y manejo de la información recogida, asegurando su accesibilidad y uso responsable a largo plazo. Se recomienda la adquisición de un sistema de información organizacional (software) que

sea administrado por la gerencia de gestión de información bajo una estrategia de gestión del conocimiento.

- Adecuar la formación del personal operacional, administrativo y logístico a partir del intercambio de experiencias y las necesidades de estos. Se recomienda realizar reinducciones periódicas a nivel organizacional donde se aborden no solo los pilares de la Acción Integral contra Minas, sino las experiencias propias desde los proyectos y se creen espacios para la retroalimentación.
- Teniendo en cuenta que la organización se encuentra finalizando la construcción de su Plan Estratégico 2024 -2027 se recomienda la difusión de este a partir de jornadas de capacitación permanentes o recurrentes. Adicionalmente, es importante que la base operativa de las oficinas regionales haga parte de las construcciones futuras.
- La sistematización organizacional es una práctica que permite recuperar críticamente la experiencia y obtener aprendizajes. Representa una estrategia clave para la Acción sin Daño, por lo que se recomienda promover en la cultura organizacional la documentación y difusión de aprendizajes, buenas prácticas y oportunidades de mejora entre las áreas.
- El seguimiento a la ejecución presupuestal requiere de un análisis financiero constante, se recomienda la generación de líneas específicas para cada componente el presupuesto. Lo anterior, permitirá generar análisis de costo beneficio e identificar estrategias para optimizar los recursos.
- Consolidar una estrategia de comunicación a partir de herramientas de difusión de la experiencia organizacional, en el marco de las buenas prácticas y lecciones aprendidas.

Implementación

- Fortalecer los procesos territoriales de difusión de información pública de Educación en Riesgo de Minas y vincular a nivel presupuestal rubros específicos para la gestión de refrigerios. Lo anterior, debido a recomendación de las comunidades y la autoridad local.
- Se recomienda fortalecer el componente de Asistencia Integral a Víctimas a nivel regional, formando continuamente a facilitadores, coordinación y gerentes en la caracterización y trabajo con sobrevivientes y víctimas.
- Se requiere que procesos como el Enlace comunitario y la Asistencia Integral a Víctimas cuenten con presupuesto para realizar formación presencial - continua con todo el personal de las oficinas. Esto aporta a la integralidad de los equipos y permite mejorar el relacionamiento con las comunidades sin importar el rol de las personas.
- Fortalecer la rendición de cuentas hacia las comunidades a partir de recursos audiovisuales que puedan ser diseminados por medios como el WhatsApp.

Conclusiones

Las siguientes conclusiones se derivan de los efectos a mediano plazo del Programa de Acción Integral contra Minas de Suiza en Colombia (AICMA), en el marco general de acción del donante COSUDE.

El primer efecto relevante es el fortalecimiento de las capacidades de los actores involucrados en la AICMA, lo que ha tenido un impacto directo en la organización encargada de implementar el proyecto. Gracias a este proceso, las capacidades de análisis territorial integral han mejorado significativamente. Un claro ejemplo de ello es la propuesta de zonificación presentada a la Autoridad Nacional. Además, los aprendizajes obtenidos, tanto las lecciones aprendidas como las oportunidades de mejora, han consolidado una valiosa oportunidad de aprendizaje tanto interna como externa.

En cuanto a la respuesta a las necesidades humanitarias y de protección, la CCCM ha actuado de acuerdo con los pilares del AICMA, evaluando de manera constante las necesidades y capacidades de las comunidades bajo un enfoque de "acción sin daño".

El tercer efecto se centra en la recuperación y mejora de las condiciones socioeconómicas de las comunidades afectadas por la presencia de minas antipersonal, especialmente a través del acceso a servicios básicos y soluciones duraderas. Este proceso, como se ha mencionado anteriormente, requiere el apoyo estructural del Estado, no solo en términos de inversión y desarrollo de programas, sino también en la provisión de garantías de seguridad.

El último efecto se refiere a la promoción del diálogo sobre política pública, en coordinación con socios y donantes. Esta acción forma parte de las líneas estratégicas del nuevo Plan Estratégico de la organización, el cual busca aportar al sector los aprendizajes y acciones desarrollados en el marco de las actividades de desminado humanitario.

Finalmente, el proyecto contribuye al restablecimiento de derechos y al goce efectivo de los territorios, elementos fundamentales para la construcción de paz. En este contexto, la Acción Integral contra Minas en el departamento de Putumayo sigue siendo una experiencia viable, apoyada por la comunidad, y un modelo de intervención exitoso en la región.

Referencias

Proyecto Acción Integral contra Minas en Putumayo. Plan de intervención – Marco Lógico. (2021). Documento institucional.

Informes de monitoreo y seguimiento semestrales. Proyecto Acción Integral contra Minas en Putumayo. Documento institucional.

Informes de narrativos y financieros a la COSUDE. Proyecto Acción Integral contra Minas en Putumayo. Documento institucional.

Programa de Acción Integral Contra Minas Fase 1: 2021-2025. COSUDE. <https://www.eda.admin.ch/deza/es/home/paises/colombia.html/content/dezaproyectos/SDC/es/2021/7F10748/phase1?oldPagePath=/content/deza/es/home/laender/kolumbien.html>

Entrevistas

Einer. Secretario Vereda El Progreso, Puerto Asís Zona 1.

Marcial. Vereda la Esmeralda, Puerto Asís Zona 1. Beneficiario de área liberada.

Patricia. Vereda Los Álamos, Puerto Asís Zona 1. Beneficiaria de área liberada.

Rubiela. Vereda El Progreso, Puerto Asís Zona 1. Beneficiaria de área liberada.

Libardo. Vereda El Progreso, Puerto Asís Zona 1. Beneficiario de área liberada y sobreviviente de MAP/MSE y AE.

Jesus, Vereda Teteyé, Finca El Naranjal, Puerto Asís Zona 1. Beneficiario de área liberada.

Diana, Punto Focal de Género (PFG) Oficina Putumayo.

Alex, Punto Focal de Género (PFG) Oficina Putumayo.

Diego, Punto Focal de Género (PFG) Oficina Putumayo.

Sandra, Punto Focal de Género (PFG) Oficina Putumayo.

Dani, Punto Focal de Género (PFG) Oficina Putumayo.

Katherine, Punto Focal de Género (PFG) Oficina Putumayo.

Ederth Adrian Ibarra Oliva, Alcalde de Puerto Caicedo.

Secretaria de gobierno de Puerto Asís.

Magda Portilla, Gerente de Proyectos y Monitoreo.

Aida Lupe Acosta, Coordinadora Adjunta de Enlace Comunitario Oficina Putumayo.

Jhon Edinson, Apoyo logística Oficina Putumayo.

Cabildo indígena Sitará, Puerto Asís